



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SESIÓN PÚBLICA NÚM. 32 ORDINARIA

JUEVES 20 DE ABRIL DE 2017

En la Ciudad de México, siendo las once horas con cuarenta y dos minutos del jueves veinte de abril de dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.

El señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se incorporó durante el transcurso de la sesión.

La señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos no asistió a la sesión por desempeñar una comisión oficial.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número treinta y uno ordinaria, celebrada el martes dieciocho de abril del año en curso.

Por unanimidad de nueve votos, el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del jueves veinte de abril de dos mil diecisiete:

I. 8/2014

Incidente de cumplimiento sustituto 8/2014, respecto de la sentencia dictada el dos de junio de dos mil dieciséis por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 1756/2004, promovido por [REDACTED].

En el proyecto formulado por la señora Ministra Norma Lucía Piña Hernández se propuso: *“PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina, de oficio, que es procedente el cumplimiento sustituto de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto 1756/2004, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal (hoy de la Ciudad de México). SEGUNDO. Remítanse los autos del juicio de amparo al juzgado de origen, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de la presente resolución”.*

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los considerandos primero y segundo relativos, respectivamente, a la competencia y a la procedencia, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

La señora Ministra ponente Piña Hernández presentó el considerando tercero, relativo al estudio de fondo. Aclaró que el análisis debe ser con base en el artículo 107, fracción XVI, constitucional, así como en la Ley de Amparo abrogada, en atención a la fecha de la ejecutoria.

Recordó que: 1) la sentencia de amparo tuvo el efecto de que la autoridad responsable —Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal— dejara insubsistente un decreto expropiatorio y, como consecuencia, devolviera a la quejosa un bien inmueble expropiado con motivo de ese decreto, 2) en la fase de cumplimiento de la sentencia, y después de haberse tramitado diversos recursos relacionados con dicho procedimiento, la responsable argumentó dos diversas razones por las que no está en condiciones de cumplir la sentencia de amparo en sus términos, primera, que el inmueble expropiado a la quejosa fue rehabilitado, remodelado y ampliado en las construcciones que tenía, a saber, se agregaron cuatro viviendas más, por lo que ya no presenta las mismas condiciones materiales ni el mismo valor económico que tenía en el momento en el que se expropió y, segunda, que el inmueble no está materialmente a disposición de la autoridad pues, con motivo de su expropiación, se incluyó en un programa de vivienda, siendo que los beneficiarios de dicho programa celebraron actos jurídicos para asumir los costos de rehabilitación, remodelación y construcción de las nuevas viviendas con fines de adquisición, además que están en posesión material de las viviendas y locales comerciales, por lo que adujo que



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

se pueden causar mayores afectaciones a esos terceros que el beneficio económico que le correspondería a la quejosa con la ejecución de la sentencia.

El proyecto propone determinar que existe imposibilidad para que la responsable cumpla la sentencia de amparo mediante la devolución del inmueble, en razón de que su devolución excedería los fines restitutorios en el juicio de amparo, además de que no está a disposición material de la autoridad responsable y, dado que el cumplimiento de la sentencia de amparo en sus términos afectaría derechos de terceros, se procede a ordenar el cumplimiento sustituto de la sentencia.

El señor Ministro Cossío Díaz se manifestó de acuerdo con el proyecto, y sugirió agregar una mención para relacionar este cumplimiento sustituto con la actualización correspondiente, como se resolvió en el incidente de cumplimiento sustituto 4/2014.

La señora Ministra ponente Piña Hernández recapituló que este incidente había sido motivo de pronunciamiento por la Primera Sala: ante la determinación del juez de que no procedía el cumplimiento sustituto, derivado de que los convenios o contratos que se habían firmado con los terceros beneficiarios únicamente aparecían firmados por él y no por la autoridad responsable, se resolvió que era posible el cumplimiento sustituto, en atención a las circunstancias del caso concreto y porque el juez sólo había atendido un requisito formal, por lo que se regresó el asunto



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

para que el juez iniciara un incidente de cumplimiento sustituto y, de precisarse el valor de inmueble, se debería tomar en cuenta la actualización.

Modificó el proyecto para que, en su momento, se determine el monto más su actualización, aun cuando ese problema se abordará en un recurso de queja bajo su ponencia en la Primera Sala.

El señor Ministro Franco González Salas se pronunció de acuerdo con el proyecto, separándose de algunas consideraciones que no afectan el sentido de la resolución.

El señor Ministro Pérez Dayán concordó con el agregado de la actualización, pues ello conllevará a una indemnización justa. Apuntó que debe tomarse en cuenta que, en el caso concreto, el quejoso promovió el juicio de amparo sin que operara la suspensión, por lo que la autoridad pudo modificar el inmueble y, tres años después, se concedió la protección constitucional.

Opinó que, bajo esta perspectiva, la autoridad responsable no debería alegar la imposibilidad jurídica para devolver, que la quejosa recibiría mucho más de lo que le corresponde y que la sociedad se vería más perjudicada al cumplirse sustitutivamente la sentencia —pues se afectarían unas viviendas, contratos celebrados con terceros, créditos otorgados, entregas de vivienda, entre otros factores—, ya que, al final de cuentas, necesariamente el costo de devolución resultará más amplio que el que se debió recibir



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

el día en que se expropió. Agregó que la indemnización no sólo debe consistir en el precio del inmueble traído al valor actual, sino en el lucro cesante, así como los daños y perjuicios que se le causaron al particular.

Advirtió que, de considerarse lo contrario, significaría que el juicio de amparo sólo serviría para prolongar durante varios años una indemnización, por el monto que hubiera correspondido el día de la expropiación, con lo cual se abriría un margen importante de impunidad a la autoridad, en cuanto al pago que debe realizar al no cumplir una ejecutoria.

Por tanto, consideró que no sólo debe ordenarse incluir una actualización, pues ello limitaría al valor del precio en el momento de la expropiación al valor actual, sino que deben agregarse los demás aspectos precisados.

En este momento se incorporó al salón de sesiones el señor Ministro Pardo Rebolledo.

El señor Ministro Cossío Díaz recordó que esa discusión se suscitó al resolver el caso de “El Encino”, y recalcó que el incidente de cumplimiento sustituto, previsto en el artículo 107 constitucional, no debe asemejarse a una penalización a las autoridades —como decía el señor Ministro Pérez Dayán, en cuanto al lucro cesante—, sino que se trata de una cuantificación en dinero de una sentencia que no se puede ejecutar materialmente.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Observó que, de adoptarse esa idea, este incidente se desviaría hacia una condición prácticamente punitiva a las autoridades responsables.

La señora Ministra ponente Piña Hernández aclaró que el proyecto atendió a que la legislación prevé que el juicio de garantías tiene un efecto restitutorio; por lo tanto, en el caso no sería posible porque se regresaría a la quejosa su inmueble en unas condiciones con las que no contaba, por lo que se propone el cumplimiento sustituto, no en función de un valor catastral, sino en función de un valor comercial más actualización.

Abundó que no se trata de que se haya otorgado o no la suspensión, sino que el amparo se resolvió con posterioridad, cuando ya estaban construidas algunas viviendas y villas.

El señor Ministro Pérez Dayán reconoció que la finalidad del juicio de amparo no es ordenar una penalización o cuantificación. No obstante, en la etapa de cumplimiento de una sentencia de amparo que contiene el efecto para restituir el inmueble, y en el transcurso de su tramitación dicho inmueble tuvo mejoras, éstas deben entenderse incluidas en la restitución, más allá de que pudiera considerarse excesivo para unos o no para otros.

Subrayó que no se debe enviar el mensaje a la autoridad de que expropie y, si no hay suspensión del acto reclamado, realice modificaciones a los inmuebles, en la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Inteligencia de que, después de varios años de un juicio de amparo que se resuelva en su contra, argumente que la sociedad se verá afectada porque se entregó a terceros, hubo contratos y, en consecuencia, sólo cubra lo que debió haber pagado el día de la expropiación, actualizado al día de la liquidación.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del considerando tercero, relativo al estudio de fondo, la cual se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas con reservas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán con reservas y Presidente Aguilar Morales. El señor Ministro Presidente Aguilar Morales anunció voto concurrente.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto de la lista:

II. 76/2016-CA

Recurso de reclamación 76/2016-CA, derivado de la controversia constitucional 89/2016, promovida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En el proyecto formulado por el señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se propuso: *“PRIMERO. Es procedente pero infundado el recurso de reclamación interpuesto. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido de trece de septiembre de dos mil dieciséis*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

dictado por la Ministra instructora, en la controversia constitucional 89/2016”.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la procedencia y a la legitimación, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo presentó el considerando quinto, relativo al estudio de fondo. El proyecto propone declarar infundados los agravios, en razón de que, conforme al artículo 105, fracción I, constitucional, no existe hipótesis alguna en la que se prevea la procedencia de una controversia constitucional entre un órgano constitucional autónomo de una entidad federativa y alguno de los poderes de la propia entidad federativa.

Apuntó que los incisos del a) al j) de dicha fracción I establecen, en términos generales, que la Federación, las entidades federativas, los municipios, el Poder Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, cualquiera de las Cámaras de éste, la Comisión Permanente, los Poderes de una misma entidad federativa, y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México podrán interponer la controversia



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

constitucional, y que el once de junio de dos mil trece se reformó para ampliar los sujetos legitimados, agregando el inciso I), para contemplar a los órganos constitucionales autónomos, precisando que procederá dicha vía entre dos de ellos y, entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión. Adicionalmente, el siete de febrero de dos mil catorce, este último inciso fue nuevamente reformado para prever, dentro de los órganos constitucionales autónomos, al organismo garante que establece el artículo 6° constitucional.

En ese tenor, precisó que los artículos 41, 116 y 122 constitucional establecen que el Instituto Electoral del Distrito Federal es un órgano constitucionalmente dotado de plena autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; no obstante, no se encuentra previsto como uno de los sujetos que tengan legitimación pasiva, en términos del artículo 105, fracción I, de la Constitución, por lo que la controversia constitucional resulta notoriamente improcedente, tal como se señaló en el acuerdo desechatorio reclamado.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena recordó que este asunto fue discutido en la Primera Sala, en la que se posicionó en el sentido de que no existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, además de que se implica un estudio de fondo: la naturaleza del sujeto pasivo de una controversia constitucional, tomando en cuenta los



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

precedentes de este Tribunal Pleno. Por tanto, estaría en contra del proyecto.

El señor Ministro Cossío Díaz se expresó en contra porque debe diferenciarse entre la legitimación activa y la legitimación pasiva, aunado a que el proyecto desconoce algunos precedentes de esta Suprema Corte, en los que se ha reconocido la legitimación pasiva a sujetos no mencionados expresamente en el artículo 105, fracción I, constitucional, como la tesis P. LXXIII/98 que prevé: “Sin embargo, en cuanto a la legitimación pasiva para intervenir en el procedimiento relativo no se requiere, necesariamente, ser un órgano originario del Estado, por lo que, en cada caso particular deberá analizarse ello, atendiendo al principio de supremacía constitucional, a la finalidad perseguida con este instrumento procesal y al espectro de su tutela jurídica”, a partir del cual, en otros precedentes, se determinó la legitimación pasiva de la Comisión Federal de Competencia Económica, a los Secretarios de Estado, al Ministerio Público Federal, a diversos órganos autónomos locales y al INEGI; inclusive, la legitimación activa.

En ese tenor, consideró que se trata de una controversia constitucional auténtica, máxime que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal demandó a los órganos en cuestión por un tema competencial, por lo que la falta de previsión expresa del nombre del órgano demandado no es razón suficiente para desechar la controversia constitucional.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Agregó estar en contra del párrafo de la página treinta y ocho del proyecto, concerniente a algunas condiciones de retroactividad de ciertas disposiciones, dado que existe el artículo transitorio segundo del decreto respectivo, el cual prevé que las disposiciones mantendrán su vigencia hasta en tanto se expidan las nuevas normas.

El señor Ministro Franco González Salas consideró que los supuestos del artículo 105 constitucional deben leerse de forma taxativa y cerrada, pues no hay dispositivo que prevea “otras similares o parecidas”; por tanto, si el órgano en cuestión no está expresamente señalado, no puede tener legitimación pasiva ni activa.

Abundó que, conforme al artículo 105 constitucional, las controversias constitucionales no proceden en materia electoral, siendo el caso que el acto impugnado proviene del Instituto Electoral del Distrito Federal, cuyo objeto es cumplir con el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, respecto de lo cual este Tribunal Pleno se ha pronunciado que dicho servicio corresponde a la materia electoral. Consecuentemente, existe otra causa de improcedencia en el caso concreto.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea discordó del proyecto porque, por una parte, reiteradamente ha votado en el sentido de que el artículo 105 constitucional no puede leerse de manera cerrada o literal, sino ampliarse a todos aquellos sujetos u órganos a través de los cuales pueden plantearse controversias, para lograr la vigencia y el respeto



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

de la Constitución, además de que ha sido tradición de esta Suprema Corte aceptar que la legitimación pasiva no tiene que estar expresa en dicho artículo, sino que basta con que el órgano al que se demanda cuente con facultades para emitir resoluciones con autonomía.

Por otra parte, estimó que el análisis no se debe hacer sobre el texto vigente del artículo 105 constitucional —tras la reforma política de la Ciudad de México—, sino con el texto anterior, en el cual se establecía claramente la hipótesis de procedencia entre los órganos del Distrito Federal, máxime que, de acuerdo a los artículos transitorios segundo y quinto de dicha reforma: “Las normas de esta Constitución y los ordenamientos legales aplicables al Distrito Federal que se encuentren vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán aplicándose hasta que inicie la vigencia de aquellos que lo sustituyan”, “Los órganos de gobierno electos en los años 2012 y 2015 permanecerán en funciones hasta la terminación del periodo para el cual fueron electos [...] Las facultades y atribuciones derivadas del presente Decreto de reformas constitucionales no serán aplicables a dichos órganos de gobierno, por lo que se sujetarán a las disposiciones constitucionales y legales vigentes con antelación a la entrada en vigor del presente Decreto”.

Por ello, valoró que el supuesto de procedencia del otrora inciso k) se encuentra vigente hasta en tanto no se integren los nuevos órganos de gobierno de la Ciudad de México que sustituyan a los que ahora funcionan. Asimismo,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Suponiendo que se partiera del artículo vigente, estaría por la procedencia porque debe analizarse en conjunto con el inciso k) derogado. Por tanto, indicó que no existe una causa notoria y manifiesta de improcedencia.

Acotó que no se pronunciaría en cuanto al tema de la materia electoral, planteado por el señor Ministro Franco González Salas.

El señor Ministro Laynez Potisek concordó con el señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea en que el inciso k) continúa vigente por los artículos transitorios referidos y, por lo tanto, es procedente la controversia constitucional, aunado a que la reforma política de la Ciudad de México no ha entrado en vigor.

Resaltó la tesis de jurisprudencia P./J. 19/2007 de rubro "TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. AL SER UN ÓRGANO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL".

Adelantó que, como indicó el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, el asunto implicaría un estudio de fondo en cuanto al régimen transitorio y la naturaleza de los órganos de la hoy Ciudad de México, en relación con su legitimación pasiva y activa en la controversia constitucional. En ese contexto, se manifestó en contra del proyecto, aunado a que, aun cuando el citado artículo 105 pueda ser interpretado taxativamente, esta Suprema Corte lo fue ampliando



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

conforme la evolución de los distintos órganos constitucionales autónomos, máxime que reconoció la legitimación pasiva y activa de dichos órganos, cuando aún no estaban mencionados en ese artículo, por haber considerado que quedaban en total estado de indefensión en cuanto a sus competencias frente a los poderes del Estado.

El señor Ministro Medina Mora I. no compartió el proyecto pues, si bien ha estado de acuerdo con la lectura taxativa de los supuestos de legitimación activa del artículo 105, fracción I, no puede extenderse automáticamente a la legitimación pasiva, dado el criterio del Tribunal Pleno, consistente en que es posible demandar en controversia constitucional a organismos que tengan funciones de autonomía, a pesar de que no se encuentren enumerados de forma expresa en dicho artículo, pues sus actos pueden ser invasivos de esferas competenciales ajenas, por lo que se debe estimar que hay legitimación pasiva en el caso particular.

Aclaró que no se pronunciaría sobre la naturaleza de la decisión impugnada, pues ello sería, en todo caso, motivo del estudio de fondo.

El señor Ministro Cossío Díaz apuntó que el acto reclamado se impugnó porque, aparte del aspecto electoral advertido por el señor Ministro Franco González Salas, se introdujeron modificaciones en la rama administrativa que — según alega— invadieron las competencias de la Asamblea Legislativa. Por tanto, valoró que sería complejo determinar



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

que, por la naturaleza electoral del acto, se deseche de plano la controversia constitucional, independientemente de que su denominación aluda al servicio profesional de carrera.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea concordó con el señor Ministro Cossío Díaz en que no se puede, de entrada, sostener que el acto es electoral, dado que se requiere un estudio de fondo y, por ende, el asunto no es notoriamente improcedente.

Por otro lado, recapituló que, en diversos precedentes, este Tribunal Pleno ha distinguido la materia electoral para efecto de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, siendo que, en éstas, se ha privilegiado la procedencia y sólo se ha catalogado como electoral lo que es de manera directa, es decir, lo relacionado directamente con la elección de los titulares de los cargos de elección popular.

Adelantó que, en caso de que se decida por la legitimación pasiva, se deberá analizar si se reiteran o no los precedentes referidos, o de qué manera se ajustan.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo leyó el artículo transitorio quinto del decreto de reforma política de la Ciudad de México: "Los órganos de gobierno electos en los años 2012 y 2015 permanecerán en funciones hasta la terminación del periodo para el cual fueron electos. En su desempeño se ajustarán al orden constitucional, legal y del



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal destinado a normar las funciones a su cargo, que hubiere emanado o emane de los órganos competentes. Las facultades y atribuciones derivadas del presente Decreto de reformas constitucionales no serán aplicables a dichos órganos de gobierno, por lo que se sujetarán a las disposiciones constitucionales y legales vigentes con antelación a la entrada en vigor del presente Decreto”.

Opinó que, si bien hay un precedente en el que se reconoció la legitimación del Instituto Electoral del Distrito Federal, partió de una disposición constitucional diversa, precisamente antes de dicha reforma, para justificar las controversias constitucionales entre dicho Instituto y otros órganos de Gobierno del Distrito Federal; entonces, dicho artículo transitorio se refiere a los órganos de gobierno a partir del nuevo decreto, para hacer valer controversias constitucionales, por lo que mantuvo la propuesta del proyecto.

Asimismo, estimó que no se debe distinguir entre legitimación activa y legitimación pasiva, sino que debe aplicarse indistintamente el criterio cuando el texto constitucional no reconoce algún órgano como legitimado para intervenir en una controversia constitucional.

Hizo hincapié en la importancia de la propuesta del señor Ministro Franco González Salas, en relación con la naturaleza del acto impugnado, pero estimó que primeramente debe dilucidarse la causa de improcedencia



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Invocada en el auto desechatorio, materia de este recurso de reclamación y, en su caso, abordar la diversa causa por la materia del acto.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales se pronunció a favor del proyecto, coincidiendo con el señor Ministro Franco González Salas en la interpretación limitativa y taxativa del artículo 105, siendo que su fracción I, inciso I), no amerita mayor interpretación al indicar que las controversias constitucionales pueden suscitarse entre “Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución”, mas no contempla su procedencia en contra de algún poder local de las entidades federativas, como en el caso, con independencia de la naturaleza del acto del tribunal electoral local.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, respecto de la cual se suscitó un empate de cinco votos a favor de los señores Ministros Franco González Salas con reservas, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, y cinco votos en contra de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea, Medina Mora I. y Laynez Potisek.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El Tribunal Pleno acordó aguardar la presencia de la señora Ministra Luna Ramos para que, con su voto, se resuelva definitivamente el asunto.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales acordó prorrogar la discusión del asunto para la siguiente sesión, por lo que deberá permanecer en lista.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto de la lista:

III. 74/2016-CA

Recurso de reclamación 74/2016-CA, derivado de la controversia constitucional 90/2016, promovida por los Municipios de Amacuzac, Coatlán del Río, Miacatlán, Tepoztlán, Zacatepec, Jojutla, Tlatlnepan, Ocuilco, Temoac y Atlatlahucan, Estado de Morelos. En el proyecto formulado por la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos se propuso: *"PRIMERO. Queda firme el auto recurrido respecto de los Municipios Jonacatepec, Tlaltizapan, Ayala y Xochitepec, todos del Estado de Morelos. SEGUNDO. Es procedente y fundado el presente recurso de reclamación. TERCERO. En la materia de la reclamación, se revoca el auto recurrido para los efectos precisados en la parte final del último considerando de la presente ejecutoria"*.

Dada la ausencia de la señora Ministra ponente Luna Ramos, la señora Ministra Piña Hernández se hizo cargo de la ponencia del asunto.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los considerandos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación, a la procedencia de la vía y a los agravios, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

La señora Ministra ponente Piña Hernández presentó los considerandos sexto y séptimo relativos, respectivamente, a lo que no es materia del presente recurso de reclamación y al estudio. Recordó que se discutió el asunto inicialmente en la Segunda Sala y, por unanimidad de votos, fue enviado a este Tribunal Pleno para su resolución.

Narró los antecedentes del asunto: 1) dieciocho municipios del Estado de Morelos contravirtieron un decreto, 2) el Ministro instructor desechó la demanda por notoriamente improcedente, dada la causa de improcedencia del artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 105, fracción I, inciso i), constitucional, en el sentido de que las controversias constitucionales sólo pueden ser interpuestas por un municipio, además de que el artículo 38 de dicha ley reglamentaria prohíbe la acumulación de dichas



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

controversias, 3) contra ese auto, catorce municipios interpusieron el recurso de reclamación, 4) por lo anterior —y conforme al considerando sexto— debe quedar firme el desechamiento respecto de cuatro municipios que no interpusieron el recurso de reclamación, y 5) las recurrentes argumentaron que la pluralidad de entes públicos actores con un interés común no constituye una causa de improcedencia, toda vez que no se encuentra prevista legalmente.

El proyecto propone determinar que la regla general es que las causas de improcedencia en controversias constitucionales deben estar previstas en la Constitución o en el artículo 19 de la ley reglamentaria y, si no son manifiestas ni indudables, es decir, tienen que ser análisis de un estudio de fondo, no puede desecharse la demanda; no obstante, del artículo 38 de la ley reglamentaria —que prohíbe la acumulación de juicios— no se desprende la causal de improcedencia invocada, sino que únicamente contiene una norma de trámite procesal dirigida hacia el Ministro instructor, mas ello no implica que la parte actora pueda promover una demanda, si sus intereses así lo convienen, de manera conjunta.

Asimismo, señaló que se diferencia entre acumulación de demandas y juicios promovidos por una pluralidad de actores. En la acumulación de demandas, no se obliga a los actores a actuar de manera común durante el procedimiento ni implica necesariamente una unidad de pretensiones, sino



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

que es una atribución del tribunal que le permite resolver, en una sola sentencia, el cúmulo de acciones entabladas, las cuales no son necesariamente coincidentes. En el juicio promovido por una pluralidad de actores, por propia voluntad deciden entablar una defensa común de sus derechos, por economía procesal, y las pretensiones de todos los actores no siempre son las mismas.

También se distingue entre un litisconsorcio activo o pasivo voluntario y un litisconsorcio activo o pasivo necesario. En este caso, se trata de un litisconsorcio activo voluntario y, al no desprenderse de la propia ley esta causa de improcedencia, resulta fundado el recurso de reclamación. Agregó que el proyecto aduce que, aun cuando existiera expresamente dicha causa de improcedencia, el Ministro instructor pudo haber prevenido a los actores para que presentaran sus demandas por separado. La propuesta se basó en los precedentes de este Tribunal Pleno en las controversias constitucionales 40/2009, 35/2005 y 330/2001 —entre otras—, en las que diversos municipios interpusieron la controversia y no se desechó o sobreseyó en los juicios.

Aclaró que, en dichas controversias constitucionales, no participaron los señores Ministros Laynez Potisek, Medina Mora I. y ella, y que, si bien no se analizó concretamente el punto en cuestión, se imprimió un apartado en el que se expresa que no se advierte motivo de improcedencia de oficio por el propio Tribunal Pleno.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales decretó un receso a las doce horas con cincuenta y cinco minutos y reanudó la sesión a las trece horas con veintiocho minutos.

El señor Ministro Cossío Díaz puntualizó que los dieciocho municipios impugnaron la inconstitucionalidad del artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que estableció el matrimonio para personas del mismo sexo. Plantearon diversas violaciones procedimentales, básicamente, que no fueron considerados en los procesos legislativos.

Se inclinó por confirmar el desechamiento, en tanto que el proyecto disocia las figuras de acumulación, conexidad y litisconsorcio, como si fueran autónomas y cuya racionalidad procesal fuera diversa. Estimó incorrecto lo anterior porque, si la controversia constitucional tiene como objetivo satisfacer o no la pretensión de una parte que reciente una afectación en su esfera competencial, al admitir el litisconsorcio se podría desvirtuar esta vía, en tanto que cada órgano legitimado tiene que demostrar la afectación dentro de su propio ámbito competencial, además de que resultaría extraño admitirla sólo por catorce de los dieciocho municipios accionantes.

Adujo que la ley reglamentaria no contiene precepto alguno que autorice la acumulación o el litisconsorcio, siendo que, de haber pretendido el legislador que dos o más controversias constitucionales pudieran sustanciarse en un solo procedimiento, hubiera hecho la mención expresa



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

correspondiente, como es el caso de las acciones de inconstitucionalidad, que se prevé en el artículo 69 de la misma ley. Recalcó que, por el contrario, el legislador prohibió de manera expresa la acumulación de controversias constitucionales en el artículo 38 de la ley reglamentaria, lo cual implica que, cualquier acción que conlleve el mismo efecto de dichas instituciones jurídicas, no puede ser llevada a cabo, pues contravendría el espíritu de prohibición expresa de la ley. Aclaró que lo único que permite el referido artículo 38 es que se resuelvan, en la misma sesión, dos o más controversias constitucionales cuando exista conexidad, lo que no implica una pluralidad de sujetos accionando de manera conjunta, como lo asume el proyecto en su página diecinueve.

Advirtió que la propuesta cita los precedentes de las controversias constitucionales 54/96 y 6/98 para fundar su criterio; sin embargo, fueron superados por la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2003 de rubro "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. AL ACORDARSE DE CONFORMIDAD LA SOLICITUD DE FUSIÓN DE DOS O MÁS Y ORDENARSE QUE FORMEN UNA SOLA, PROPIAMENTE SE ESTÁ LLEVANDO A CABO UNA ACUMULACIÓN, LA CUAL ESTÁ PROHIBIDA EN ESA CLASE DE PROCESOS". Asimismo, si bien este Tribunal Pleno resolvió la controversia constitucional 40/2009, en la que demandaron conjuntamente tres municipios, el tema no fue discutido ni votado específicamente.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Medina Mora I. se manifestó en contra del proyecto y por el desechamiento de la demanda, pues si bien no existe una prohibición expresa para que las partes puedan promover en conjunto una controversia constitucional, no se puede traducir en proveer favorablemente la pretensión de diversos municipios por las siguientes razones: 1) el artículo 105 constitucional refiere exclusivamente a controversias entre un municipio —de manera singular— y otros órganos —específicamente la fracción I, incisos b), f) y j)—, lo cual responde a la finalidad de dicha controversia, a saber, que cada órgano debe defender la invasión de sus competencias, pero no a las competencias de terceros, 2) el mismo artículo 105 señala que las sentencias de las controversias constitucionales sólo tendrán efectos relativos a la parte que promueve, por lo que carecería de practicidad procesal permitir un litisconsorcio, además de que, por esta misma lógica, la ley reglamentaria no permite o no admite la acumulación de controversias constitucionales, y 3) la ley reglamentaria no admite supuestos procesales que son condición necesaria para el litisconsorcio en controversias constitucionales, siendo que este Alto Tribunal ha interpretado sus artículos 10 —que alude siempre en singular a la parte actora—, 11 —que prohíbe expresamente la representación común— y 38 —que prohíbe expresamente la acumulación de expedientes— en el sentido de no permitirla.

Abundó que los municipios pueden perfectamente hacer valer su demanda de manera individual, como



ordinariamente lo hacen y, de permitir la pluralidad de partes, se tendría que delimitar si el litisconsorcio solamente se verificará entre municipios o se extenderá a otros órganos.

El señor Ministro Pérez Dayán explicó que las causas de improcedencia son razones constitucionales, legales o interpretativas de la jurisprudencia, que llevan al no pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, pero todas son objetivas e inmodificables.

En el caso, estimó que el asunto es complejo porque se trata de una causa de improcedencia no tasada, sino interpretada y derivada de la prohibición de la acumulación de controversias constitucionales.

Recordó que, en la especie, cuatro municipios no reclamaron el auto de desechamiento, lo cual provocaría un trastorno procesal en cuanto a las consecuencias de los restantes que sí lo impugnaron, además de que generaría dificultades en el manejo procesal del expediente.

No obstante, consideró que el problema es subsanable, pues si varios municipios promovieron una demanda y cada uno está legitimado para ello, se les podría prevenir para que formulen sendas demandas, en la inteligencia de que los demás presupuestos procesales están satisfechos: legitimación activa, legitimación pasiva y están en tiempo. Asimismo, estimó que la otra opción para subsanar es designar un representante común, por vía supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, para el efecto de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

que las determinaciones que se tomen afecten o beneficien a todos. Independientemente de lo anterior, adelantó que, al final, se resuelvan todas las controversias constitucionales en una misma sesión.

Bajo esta perspectiva, se expresó en favor del proyecto, por las mismas razones que, en su momento, dio en la discusión de la Segunda Sala.

El señor Ministro Franco González Salas coincidió medularmente con los señores Ministros Cossío Díaz y Medina Mora I. porque el artículo 38 de la ley reglamentaria no deja lugar a dudas al prohibir expresamente acumular las controversias constitucionales o tenerlas en una sola demanda, para evitar que no se tomen en cuenta el conjunto de razonamientos e, incluso, se resuelvan una por una en la misma sesión.

Aclaró que, en su momento, expresó sus argumentos por escrito, los cuales refrendó en esa ocasión.

El señor Ministro Laynez Potisek precisó que la controversia constitucional, prevista en el artículo 105, fracción I, constitucional, es el medio de control de regularidad constitucional entre niveles de gobierno, poderes u órganos constitucionales, para defender sus competencias por sus propios méritos, tomando en cuenta que las supuestas violaciones no tienen por qué coincidir y, de ser así, la ley reglamentaria prevé su resolución en una misma sesión.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Por tanto, valoró que no tendría sentido jurídico ni práctico desligar la prohibición de acumulación de un pretendido litisconsorcio. En el caso concreto, subrayó que las pretensiones de los municipios son desiguales porque, el primer concepto de invalidez, es genérico en cuanto al procedimiento o el cómputo, en el segundo, es la indebida exclusión del Municipio de Ocuituco, por lo que los posibles efectos de la sentencia se enfocarían sólo en éste y, en el tercero, se solicita tener por no configurada la aprobación de la reforma en los Municipios de Puente de Ixtla y Yecapixtla. Concluyó que ninguna de estas pretensiones justifica el litisconsorcio.

Supuso que, de existir un litisconsorcio activo voluntario, no se podrían acumular los asuntos, siendo que sus efectos serán distintos. Consideró que debería mantenerse la congruencia del sistema, esto es, la prohibición de acumulación y la posibilidad de resolver en una misma sesión una serie de controversias, lo que conlleva que cada uno de los órganos interesados formule su demanda conforme a sus propios méritos y afectación.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se posicionó en favor del proyecto, estimando que —quienes están en contra— parten de una confusión conceptual: la prohibición de la acumulación y la prohibición de la presentación de una demanda por distintos actores, que son dos instituciones completamente distintas, siendo que la ley reglamentaria no



prohíbe lo segundo y, si no es así, es difícil encontrar el origen de la improcedencia invocada.

Recalcó que, aun cuando la ley establece que no hay acumulación, se trata de un mandato a la Suprema Corte para que, una vez que se presentan las controversias constitucionales, no haya acumulación, mas no se dirige a las partes, máxime que no puede haber acumulación antes de un juicio, es decir, de la presentación de la demanda.

Reconoció que podría declararse la separación de los procedimientos cuando los distintos actores tengan pretensiones contradictorias entre sí, o que requieran una exigibilidad individual para su cumplimiento.

La señora Ministra ponente Piña Hernández respondió a los diversos posicionamientos de los señores Ministros.

En cuanto a cada una de las objeciones del señor Ministro Cossío Díaz, señaló: 1) en cuanto a que se está confundiendo la acumulación y el litisconsorcio como si fueran autónomas y con una racionalidad procesal diversa; indicó que la acumulación sólo atañe a la unión procesal de dos juicios distintos para ser resueltos en una misma sentencia, mientras que el litisconsorcio se refiere a la pluralidad de partes actoras o demandadas, derivada de la voluntad o de la necesidad, 2) por lo que se refiere a que, de admitir un litisconsorcio se desvirtuaría la vía, en tanto que cada órgano legitimado tiene que demostrar la afectación a su esfera competencial; consideró que admitir un



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

litisconsorcio activo voluntario en la controversia constitucional no excluye ni impide exigir y constatar que cada parte acredite su interés jurídico o la oportunidad de forma separada, respecto del acto reclamado, 3) en relación con que admitir el litisconsorcio generaría un resultado extraño, esto es, que se admita la controversia solo a los órganos que reclamó el desechamiento y quede firme el auto respecto de los que no lo reclamaron; estimó que ello no tiene nada de particular, ya que el litisconsorcio activo voluntario deriva de la libre decisión de las partes para litigar unidas y no varía el hecho de que su derecho es individual e independiente, 4) por lo que ve a que la prohibición de acumulación y el hecho de que no haya norma expresa que autorice el litisconsorcio conducen a considerar que no se puede admitir este último; recordó que el artículo 38 de la ley reglamentaria establece una regla estrictamente procesal dirigida al órgano jurisdiccional, pero no significa que la ley prohíba expresamente ni que sea una causa de improcedencia el litisconsorcio activo voluntario, 5) en cuanto a que si el legislador hubiera querido admitir una acumulación o litisconsorcio en controversias constitucionales lo hubiera hecho, como lo hizo en el artículo 69 de la misma ley respecto de las acciones de inconstitucionalidad; precisó que la ley no se refiere a la figura del litisconsorcio, en controversias constitucionales ni en acciones de inconstitucionalidad, sino que únicamente prohibió la acumulación en la controversia, permitiéndose en la acción, puesto que en ésta se estudian normas generales



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

y, en aquéllas, pueden ser reclamados actos de diversa índole, lo que supondría un trámite procesal de mayor complejidad que se pretendió evitar para no complicar o retrasar el proceso, como ocurrió con la nueva Ley de Amparo, 6) en relación con que las controversias constitucionales 54/96 y 6/98 han sido superadas por la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2003; manifestó que el texto de dicha jurisprudencia refiere al caso de que ya existan dos o más controversias constitucionales promovidas por separado y se solicita que se fusionen en una sola para ser resueltas en una única sentencia, y si bien se denomina a la figura “fusión”, no se aviene al caso concreto, a saber, la existencia de una causa de improcedencia manifiesta e indudable al prohibirse en la ley el litisconsorcio activo voluntario, y 7) respecto a que si bien en la controversia constitucional 40/2009 no se hizo un apartado en cuanto a no advertir de oficio la actualización de una causa de improcedencia; señaló que en su considerando primero se estableció que era competente, en relación con el artículo 105, fracción I, inciso i), constitucional, toda vez que se planteó un conflicto entre tres municipios y una entidad federativa, a través de sus poderes Ejecutivo y Legislativo.

Por lo que ve a las objeciones del señor Ministro Medina Mora I., respectivamente aclaró: 1) en cuanto a que existe un principio de relatividad, que también opera en el juicio de amparo; indicó que ello no impide el litisconsorcio activo voluntario, como de hecho se da cotidianamente, y 2) por lo que ve a que se refiera la ley a la parte actora y la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

parte demandada en singular; señaló que el sentido plural o singular de los artículos no es referencia para derivar, de ahí, que el litisconsorcio activo voluntario sea una causa de improcedencia.

En relación con las objeciones del señor Ministro Laynez Potisek, respectivamente aclaró: 1) por lo que se refiere a que es conveniente respetar el sistema previsto para la controversia constitucional; valoró que no se permite la acumulación, sino resolver en una misma sesión diversos expedientes para evitar sentencias contradictorias, por lo que resultaría menos complicado para el órgano jurisdiccional tener los juicios en un solo expediente para resolverlos, y que la conveniencia de respetar la facilidad de ese sistema no genera la improcedencia de la controversia constitucional, y 2) en cuanto a que la ley no permite la acumulación al Ministro instructor; indicó que las partes las pueden proponer y será el Ministro instructor el que decida lo conducente, pero de ello no deriva una causa de improcedencia en la controversia constitucional.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales se manifestó de acuerdo con la propuesta, excepto con el punto de que se pida a los municipios que vuelvan a presentar sus demandas de manera individual, porque eso no sería congruente con que no lo pueden hacer conjuntamente.

La señora Ministra ponente Piña Hernández adelantó que, si la mayoría así lo decide, no tendría inconveniente en eliminar la referencia de que se ordene que los municipios



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

actores recurrentes presenten sus demandas en forma individual.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales se inclinó por eliminar ese efecto, pues finalmente el Ministro instructor tomará la decisión correspondiente.

El señor Ministro Cossío Díaz concordó en que se debe eliminar de la página catorce la mención de que “sin perjuicio de que, si lo estima conveniente, ordene tramitar en forma separada las pretensiones de los 14 municipios actores recurrentes, supuesto en el cual deberá requerirlos para que presenten sus demandas respectivas en forma individual con las copias y anexos que les correspondan”.

El señor Ministro Pardo Rebolledo reconoció no entender la causa por la que la ley reglamentaria prohíbe la acumulación en las controversias constitucionales pues, si la razón fundamental de la acumulación es evitar sentencias contradictorias en litigios similares o iguales, por lo que dicha prohibición permitiría sentencias contradictorias.

No obstante, partiendo de la base de que existe la prohibición expresa en el artículo 38 de la ley reglamentaria y de que la acumulación requiere de una declaratoria judicial cuando ya hay varios juicios en trámite, entonces se diferenciaría de la presentación de una demanda con varios actores, por lo que un litisconsorcio activo voluntario no es una causa de improcedencia ni pudiese sostenerse que, con



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

esa interpretación, se atenuaría la prohibición de la acumulación.

En ese tenor, consideró que, si se manifiesta una mayoría a favor del proyecto, la demanda presentada sería procedente y tendría que tramitarse tal como se presentó. Por otra parte, si se llegara a aceptar que no hay una causa de improcedencia manifiesta e indudable, los municipios no deben volver a presentar sus demandas, pues el Ministro instructor cuenta con los instrumentos procesales adecuados para que se ordene la reproducción y certificación de cuantas copias fueran necesarias para que la Secretaría de Acuerdos respectiva registre de manera separada cada una de las demandas y se vuelvan a turnar. Por tanto, concordó con eliminar la instrucción de volver a presentar las demandas.

La señora Ministra ponente Piña Hernández modificó el proyecto para eliminar de la página catorce: “sin perjuicio de que, si lo estima conveniente, ordene tramitar en forma separada las pretensiones de los 14 municipios actores recurrentes, supuesto en el cual deberá requerirlos para que presenten sus demandas respectivas en forma individual con las copias y anexos que les correspondan”.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales coincidió en que no se trata de una acumulación, aunado a que ésta conlleva una determinación judicial más allá de la voluntad de los promoventes. Ejemplificó que, en la Ley de Amparo,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

se eliminó la acumulación y se instauró la concentración, para que un solo órgano conozca de los asuntos.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada de los considerandos sexto y séptimo relativos, respectivamente, a lo que no es materia del presente recurso de reclamación y al estudio, la cual se aprobó por mayoría de seis votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. Los señores Ministros Cossío Díaz, Franco González Salas, Medina Mora I. y Laynez Potisek votaron en contra.

Por instrucciones del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el secretario general de acuerdos leyó los puntos resolutivos que regirán el presente asunto, en los siguientes términos:

“PRIMERO. Queda firme el auto recurrido respecto de los Municipios Jonacatepec, Tlaltizapan, Ayala y Xochitepec, todos del Estado de Morelos. SEGUNDO. Es procedente y fundado el presente recurso de reclamación. TERCERO. En la materia de la reclamación, se revoca el auto recurrido”.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

Acto continuo, levantó la sesión a las catorce horas con veinte minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Tribunal Pleno para acudir a la próxima



Sesión Pública Núm. 32

Jueves 20 de abril de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

sesión pública ordinaria que se celebrará el lunes veinticuatro de abril del año en curso, a la hora de costumbre.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN